

## FRANCIA

## SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN JUNIO

**Por cuarto mes consecutivo el tema más relevante continúa siendo la reforma laboral y las movilizaciones y las huelgas que ésta provoca** El miércoles 1 de junio el tráfico ferroviario se vio afectado por los paros durante una jornada de huelga en la SNCF y, en la energía, los sindicatos CGC y Unsa decidieron unirse a la movilización contra el proyecto de ley de reforma laboral cuando la CGT ya había votado una huelga reconducible en las 19 centrales nucleares que cuenta Francia.

Sin embargo, la movilización no obtuvo un éxito masivo en la empresa ferroviaria puesto que la dirección sólo contó un 17% de huelguistas. No obstante, sí afectó seriamente al tráfico, señal que la huelga fue muy seguida por los conductores y los controladores. Además, desde el principio del año es la octava jornada en la que los agentes de la SNCF han sido llamados a cesar el trabajo, lo cual influyó en su éxito.

El primer ministro se mantuvo firme y, en un discurso ante la Asamblea Nacional afirmó que siempre ha dicho que su puerta está abierta al diálogo con los sindicatos, y agregó que “ha esperado y todavía espera las propuestas de algunos [de ellos]”. Por supuesto, en su punto de mira está la CGT, cuyo secretario general, Philippe Martínez, estima que “aunque la puerta está abierta, no se puede entrar”.

El número uno de la central sindical cambió de actitud en los primeros días del mes de junio. Ya no exigía la retirada del proyecto de ley de reforma laboral para abrir las negociaciones con el Gobierno. Lo que sorprendió en su sindicato aunque a nivel de dirigentes no parece haber suscitado gran revuelo. El miércoles día 1 por la tarde, Philippe Martínez reunió a los líderes de las federaciones para evocar el tema con ellos. La reunión se desarrolló en un clima lleno de gravedad pero “de ninguna manera de enfrentamiento”, según uno de los participantes. Únicamente el representante de la federación del sector agroalimentario -con un posicionamiento muy “lucha de clases”- criticó los cambios de actitud cuando esta federación no ha logrado movilizar en su propio sector.

Al parecer, Philippe Martínez insistió mucho en la carta conjunta que con Fuerza Obrera, FSU y la Unef envió al jefe del Estado el 20 de mayo pasado solicitándole un encuentro. Carta que quedó sin respuesta.

Al término de la reunión con los líderes de las federaciones se decidió elaborar una nota interna para explicar la estrategia y el método del sindicato. La CGT quiere utilizar los distintos puntos del texto que según ella deben evolucionar, más allá de los cuatro ya evocados por su líder: medicina del trabajo, referéndum de empresa, despido económico y, finalmente, el artículo 2 sobre la reversión de la jerarquía de las normas, sobre el que tanto Manuel Valls como François Hollande han mostrado su total rechazo a negociar. Temas éstos sobre los que la CGT desea obtener modificaciones del texto.

Esta evolución tiene el mérito de sacar a la CGT de su aislamiento. Además de que, en congreso, la CGC, que condena los bloqueos, se ha unido al campo de los que se oponen a la reforma laboral, que reúne ya a tres confederaciones de las cinco

existentes, que representan a la mitad de los trabajadores asalariados en las elecciones profesionales. Pero Philippe Martínez todavía deberá convencer a sus bases.

El texto llegó al Senado el día 2 de junio. **El Gobierno esperaba una cosa del examen por el Senado** del proyecto de ley de reforma laboral: **demostrar que este proyecto de ley “es de izquierdas”**. Una manera de poner las cosas en su sitio después de semanas y semanas de desgarros, que culminaron, a mediados de mayo, con la tentativa de presentación de una moción de censura por los diputados socialistas rebeldes, comunistas y ecologistas. “En ese momento veremos, ante todo el país, cual es vuestra visión de la democracia social, la empresa y los derechos de los trabajadores”, replicó Manuel Valls a Christian Jacob, líder de los diputados Los Republicanos.

A la espera de esta aclaración, la mayoría continúa en su línea firme: “No cederemos ni en una línea de este texto, aunque sea el artículo 2 el que concentra toda la tensión”, repitió François Hollande en una entrevista al diario *Sud Ouest*. “El proyecto de ley no será retirado. La filosofía y los principios del artículo 2 serán mantenidos”. Manuel Valls dijo lo mismo ante los diputados socialistas, explicando que la retirada del texto sería “una falta política”.

Después del Senado, el texto volverá a la Asamblea Nacional a principios de julio, y el futuro del artículo 2, el de la famosa “reversión de las normas” estará en el centro de los debates.

Christophe Sirugue, ponente del texto, declaró que debían continuar trabajando para enmendar este artículo 2, “para arreglar este tema del lugar que debe ocupar el acuerdo de empresa -que debe ser el principal- y, al mismo tiempo, proporcionar un cometido al sector profesional”.

La sombra del artículo 49-3 de la Constitución, que ya fue utilizado en la Asamblea Nacional en primera lectura, vuelve a cernirse sobre su segunda lectura cuando regrese a la Cámara Baja.

Al final de la semana del 3 de junio, las imágenes de las intemperies en Francia prevalecieron sobre las de las movilizaciones, alimentadas por los que protestaban contra el proyecto de ley de reforma laboral, con los militantes de la CGT en primera línea. **El primer ministro llamó el sábado día 4 a cesar lo antes posible la huelga en la SNCF (ferrocarriles franceses), por considerarla “totalmente incomprensible”**. 75 electos de la derecha y el centro, de París y su región, también llamaron “solemnemente” a los ferroviarios a suspender su movimiento “a causa de las inundaciones”.

No obstante, la CGT y SUD de la SNCF mantuvieron el lunes día 6 su llamada a la huelga de trenes, y también se mantuvo una jornada de acción en el sector de la energía, mientras que por su parte, los pilotos de Air France hicieron huelga por reivindicaciones propias.

La revuelta anti reforma laboral afectó igualmente a un nuevo sector, el de la recogida de basuras, con el bloqueo del centro de tratamiento e incinerador más

grande de la Región Parisina. Pero este nuevo frente no llegó a ocultar que, aunque las protestas continuaban teniendo visibilidad, estaban decayendo.

La intersindical CGT, FO, FSU, Unef, FIDL y UNL llamó a una manifestación nacional en París el 14 de junio, pero el Ejecutivo apostó por “una pérdida de impulso” del movimiento ya que esperar al voto en contra del proyecto de ley no iba a mantener la presión hasta dicha fecha.

Un informe realizado por BVA para Orange e iTélé publicado el domingo 5 de junio, demuestra que los anti reforma laboral ya no pueden prevalerse del apoyo de la opinión pública. Sólo un 45% de los franceses interrogados aprueban el movimiento. El apoyo continúa siendo mayoritario por parte de los empleados y los obreros, menos titulados y menos adinerados, pero dicho apoyo ha bajado mucho. Mientras que hace tres semanas las opiniones estaban muy divididas, en la actualidad, las dos terceras partes de los simpatizantes socialistas se declaran opuestos a la movilización contra el proyecto de ley El Khomri.

El Ejecutivo esperaba pues que el examen del texto por el Senado le permitirá volver a controlar la situación.

**Seguridad Social: un déficit de 9.100 millones de euros en 2016.** Según la Comisión de Cuentas de la Seguridad Social este déficit “estará en su nivel más bajo desde 2002”, según declaró la ministra de Asuntos Sociales, Marisol Touraine, en un comunicado. La ministra afirmaba que “el Gobierno habrá reducido así en un 70% el déficit que heredó”.

Este saldo adiciona el Régimen General y el Fondo de Solidaridad Vejez y mejoraría así en 1.700 millones de euros con relación a 2015 y, sobre todo, en 600 millones con relación a las previsiones de la Ley de Financiación de la Seguridad Social 2016.

Sin embargo, esta ligera mejora es debida enteramente a un producto excepcional de 700 millones de euros de la CSG (contribución social generalizada) atribuible a la aplicación, este año, de la Protección Universal de Enfermedad (PUMA). Esta reforma tiene por efecto convertir la rama Enfermedad en universal, al igual que la rama Familia, y se inscribe en la prolongación de la creación de la Cobertura Enfermedad Universal (CMU).

En la práctica, los ingresos de la CSG, que eran contabilizados con retraso por los regímenes especiales son, por vez primera, contabilizados al mismo tiempo que los ingresos de la CSG del Régimen General. Después esto será la norma.

A final de cuentas, el déficit se ajusta a la previsión, lo que es un gran esfuerzo sabiendo que en abril la inflación fue revisada a la baja (0,1% en lugar de 1,1%). Esto se traduce por una fuerte presión sobre los salarios y, por lo tanto, sobre los ingresos de cotizaciones.

Lo mismo ha ocurrido con la progresión de la masa salarial, revisada en un 2,3% en lugar del 2,8%, además de una reducción de 1.000 millones de euros en el Régimen

General, 300 millones en el Régimen Social de los Autónomos (RSI) y 300 más en la Mutualidad Social Agrícola.

En 2016, el déficit del Fondo de Solidaridad Vejez (FSV) se agravaría en 200 millones de euros debido a las transferencias más importantes vinculadas a los demandantes de empleo y los aprendices. Las prestaciones sociales netas serían inferiores en 650 millones de euros a las previsiones, gracias a la reforma del permiso parental de educación, que obliga a los padres a compartir el permiso con las madres pues si no, la familia perdería parte del permiso, y ellos gracias también a los 500 millones de euros de los efectos básicos positivos de la ejecución de los gastos de 2015.

Los gastos de gestión administrativa serían igualmente menores: 150 millones. El déficit del Régimen General ascendería a 5.200 millones de euros (frente a cerca de 25.000 millones en 2010), y el del Fondo de Solidaridad Vejez de 3.900 millones. La rama Enfermedad debería reducir su déficit este año en 5.200 millones de euros, frente a 5.800 millones el año pasado. El excedente de la rama Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales se reduciría de 200 millones a 550 millones. La rama Jubilación pasaría a ser excedentaria en 479 millones, tal y como estaba previsto, tras más de 10 años de déficit.

Finalmente, en la rama Familia el saldo continuaría siendo negativo en 1.000 millones de euros, es decir, con una mejora de 500 millones debida a importantes reformas, principalmente la modulación de las prestaciones familiares que entró en vigor en julio 2015.

**En junio, el Senado publicó un informe en el que subraya el déficit del Fondo de Solidaridad de las pensiones.** Esta rama de la Seguridad Social debería mostrar un saldo negativo de 3.900 millones de euros en 2016 sobre 20.000 millones de gastos. El déficit podría alcanzar 13.600 millones acumulados en 2019. Según los senadores Gérard Roche (UDI) y Catherine Génisson (PS), que el día 8 de junio publicaron un informe sobre el Fondo de Solidaridad de las pensiones (FSV), es necesario proceder a la clarificación de este Fondo “cajón de sastre” y realizar una “operación Verdad” en relación con sus cuentas.

En su origen, el FSV fue creado para financiar las prestaciones que dependían de la solidaridad nacional, en el seno de una Seguridad Social que asegura a los trabajadores y a sus familias en función de su contribución. El FSV gestiona pues derechos “no contributivos”. Principalmente asume las cotizaciones de jubilación de los demandantes de empleo (11.200 millones de euros en 2016) y de los trabajadores que se encuentran de baja médica (1.600 millones). También abona las pensiones mínimas de las personas que no han cotizado (3.100 millones).

Pero el FSV no gestiona todos los derechos no contributivos, como por ejemplo, en la rama Familia, el complemento de la pensión de jubilación por cuidado de hijos. El FSV financia el mínimo contributivo o complemento de pensión destinado a los jubilados que no cotizaron suficientemente, que asciende a 3.500 millones. Esta prestación es híbrida pues está vinculada a los derechos a pensión perfectamente contributivos.

En la práctica, ha tenido que aislar en un “compartimento hermético”, esta parte de la actividad del FSV después de la “sentencia de Ruyter” de 2015, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los rendimientos del patrimonio de los residentes franceses que trabajan en otro Estado miembro y que no pueden someterse a las contribuciones sociales francesas. En efecto, el FSV está financiado por la Contribución Social Generalizada (CSG) (9.500 millones de euros) y por diversas tasas. Para no perder 300 millones de euros descontados de las rentas del capital de los franceses que cotizan en otro país de Europa, Francia ha tenido que decir toda la verdad: decir que estos descuentos no estaban afectados a la financiación de la Seguridad Social francesa. El mínimo contributivo, en su compartimento hermético está pues financiado por un impuesto sobre los salarios, una tasa sobre las frecuencias móviles, etc.

La misión senatorial propone centrar al FSV en su cometido: asumir las cotizaciones y la pensión mínima de jubilación. El complemento de pensión por cónyuge a cargo (39 millones) debería, según los senadores, ser gestionado por la rama Familia de la Seguridad Social y las pensiones mínimas por el régimen de base del seguro de vejez. Y ya de paso, piden que el FSV deje de estar financiado por la CSG descontada sobre las rentas del capital, pero mediante la cesión de los presupuestos del Estado para evitar cualquier riesgo jurídico. También se deberán estabilizar los recursos, que han sido modificados en 18 ocasiones, en 23 ejercicios presupuestarios.

Y la misión senatorial desea igualmente que las cuentas del FSV sean consolidadas con las de la rama Vejez, lo que afloraría, no un excedente de 500 millones sino un déficit de 3.400 millones de euros en 2016.

**También se habló este mes de las claves para lograr que el acompañamiento hacia el empleo sea exitoso.** El aumento del riesgo de paro, la agravación del paro de larga duración, las transiciones profesionales más numerosas, frecuentes y variadas, y una proporción significativa de personas empleadas que desean cambiar de empleo hacen que el acompañamiento hacia el empleo esté tomando cada vez mayor importancia.

En el informe del Consejo de Orientación para el Empleo (COE) que se ha publicado esta semana, éste formula las condiciones que se han de reunir para optimizar la eficacia.

En la actualidad, el concepto reenvía a un apilamiento de dispositivos: acompañamiento reforzado para las personas más alejadas del empleo, el particular de los despedidos por causas económicas, etc. Y los dispositivos implementados con una multiplicidad de actores, desde Pôle emploi a los de la inserción por la economía, pasando por las misiones locales y los prestatarios privados. Cada uno es distinto y todos están confrontados al mismo reto. El COE insiste en la necesidad de un diagnóstico objetivo y lo más preciso posible, sobre el mercado laboral.

Según la presidenta del COE, Marie-Claire Carrère-Gée, dos modalidades son verdaderamente eficaces. Por una parte, “las entrevistas individuales “precoces” e intensivas, que mejoran las probabilidades de retorno al empleo y la calidad del empleo encontrado”. Y por otra, “la transmisión de información sobre el mercado

laboral y las posibilidades de empleo fina e inteligentemente orientadas hacia el perfil de la persona activa”.

Los actores del acompañamiento hacia el empleo deben mejorar, globalmente, sus competencias en este segundo punto, pero también desarrollar partenariados y sinergias, apunta el COE. Estima igualmente que “la profesionalización de la función [...] progresa pero no está finalizada”, y alerta sobre la necesidad de integrar los instrumentos digitales y el trabajo colaborativo.

Finalmente, el Consejo de Orientación para el Empleo insiste en que los demandantes de empleo no son los únicos en necesitar un acompañamiento. En un mundo laboral en constante evolución esto también afecta a los activos empleados. “Hemos de sensibilizarlos sobre los retos de la gestión de su trayectoria profesional y el interés de ser acompañados, aunque se sientan autónomos”, afirma Marie-Claire Carrère-Gée.

**Las creaciones de empleo harán bajar el paro.** La reactivación económica empieza a producir resultados en el mercado laboral. En el primer trimestre, el sector mercantil ha creado 40.400 empleos según los cálculos efectuados por el Insee, que se publicaron el jueves 9 de junio.

En un año, se crearon 159.600 empleos en este sector, lo que corresponde a un alza del 1%. Desde la primavera 2015, las empresas están creando empleo en Francia. “La economía francesa comienza a crear suficiente empleo como para absorber el aumento de activos”, estima Mathieu Plane, economista en el Observatorio francés de Coyunturas económicas (OFCE). “Por lo tanto, el paro debería empezar a bajar”, prevé el Sr. Plane. En efecto, la población activa progresa a un ritmo de unas 12.000 personas cada año, según el Insee.

El Gobierno espera 190.000 creaciones de empleo en 2016, por lo que, a final de año, el paro debería bajar y afectar al 9,5% de la población activa, frente al 10% en 2015 (datos OFCE).

“Ahora podemos hablar de recuperación económica puesto que las empresas contratan e invierten al mismo tiempo”, afirma Mathieu Plane. Aunque el precio del petróleo ha subido por encima de los 50 dólares el barril estos últimos días, el oro negro muestra una baja, desde el verano de 2014, favorable al poder adquisitivo de las familias y las empresas consumidoras de hidrocarburos. Y el crédito fiscal para la competitividad y el empleo (CICE), así como el Pacto de Responsabilidad, empiezan a dar sus frutos. “Las políticas de oferta tiene un coste a corto plazo, pero a medio plazo tienen resultados positivos. El saneamiento de los márgenes de las empresas y, por lo tanto, de su capacidad financiera, se traduce ahora por creación de empleos” –prosigue Mathieu Plane-. “Excepto el Brexit u otra catástrofe, no existe razón alguna para que la reactivación económica descarrile”

Otro punto positivo es que, “en 2015 la creación de empleo era arrastrada por el trabajo temporal. No ocurre lo mismo en el primer trimestre de 2016 y esto es un buen augurio para la recuperación”, subraya Vladimir Passeron, jefe del departamento de la Coyuntura del Insee.

En los tres primeros meses del año, la creación de empleo ha sido particularmente vigorosa en el sector terciario, y la construcción no destruye empleos. Es sólo la segunda vez desde el tercer trimestre de 2008 que este sector, siniestrado, muestra una creación neta de empleos en un trimestre. En poco más de siete años se han perdido 190.000 empleos. Ciertamente, el alza es débil puesto que en tres meses sólo se han creado 800 empleos en la construcción. Pero, aun así, el alza de los permisos para construir expedidos en este sector deja esperar el regreso a una mejor fortuna. Lo cual, una vez más, sería beneficioso para el crecimiento. La construcción es uno de los puntos negros que han pesado sobre el PIB estos últimos años.

No obstante, continúa habiendo un sector que experimenta serias dificultades: la industria, que en el primer trimestre ha destruido más de 8.000 empleos. La industria francesa no ha creado empleo en dicho sector desde mediados de 2001. Desde esta fecha se han destruido 975.000 empleos, es decir, 17.000 al trimestre en término medio.

**El dinamismo de la masa salarial es un alivio para la Seguridad Social.** Las empresas han aflojado el bolsillo y han gratificado a sus empleados. En el primer trimestre, el crecimiento de la masa salarial en el sector privado ha sido dos veces mayor de lo previsto, y dos veces mayor que durante el mismo periodo de 2015, con un 1,4% según las cifras publicadas por la Agencia central de los organismos de Seguridad Social (ACOSS).

Esto se explica, en parte, por el aumento de las plantillas de las empresas: +0,4%; pero, sobre todo, se deriva del aumento, en un 1,1%, del salario mensual por trabajador.

La explicación sería que la inflación, punto de referencia en el momento de las negociaciones salariales, debería ser casi nula este año (+0,1%), lo cual no incita a un empujón salarial. Según Alain Gubian, director de Estadísticas, de ACOSS, las empresas han optado por suavizar las restricciones salariales porque el crecimiento está de vuelta: “Cuando no hay inflación el efecto precio ya no actúa; pero cuando el pastel es más grande, todos pueden beneficiarse”.

Queda por saber cuál es la composición de esa alza trimestral de salarios. ¿Se trata de aumentos salariales perennes o de primas puntuales? Un poco de los dos. “Las alzas observadas en las instituciones financieras o en la industria farmacéutica son importantes, lo cual incita a pensar que se trata de primas”, analiza Alain Gubian.

En el segundo trimestre, la progresión de la masa salarial será posiblemente débil como consecuencia de que ciertas primas sólo duran una temporada y no vuelven a ser abonadas. Pero sea como sea, “la dinámica de la masa salarial es una buena noticia aunque una parte esté compuesta por primas”, según el Sr. Gubian.

Si la mejora se confirma, la Seguridad Social se beneficiará mediante ingresos suplementarios de cuotas sociales. En el primer trimestre, el crecimiento de la masa salarial ha sido de un 2,5% en ritmo anual. Por el momento, ritmo más sostenido que las previsiones del Gobierno para el año 2016, que fueron revisadas a la baja esta primavera: del 2,8% al 2,3%. Esta proyección parece ahora más prudente. Si la

recuperación del empleo se confirma, ésta será superada. Con 0,2 puntos de masa salarial suplementaria este año, los ingresos de la Seguridad Social crecerían en 400 millones de euros.

En el sector público, el pronóstico de progresión de la masa salarial ya ha sido revisado al alza en primavera: de 1,1% al 1,4% debido a la revalorización del punto de índice salarial (que permite calcular todos los salarios de la función pública francesa). Esta alza de las remuneraciones va a provocar un gasto suplementario para la Seguridad Social de 145 millones de euros pero, al mismo tiempo, dará lugar a más ingresos por cotizaciones.

**El paro de larga duración afecta a más de 1.200.000 personas en Francia.** Esta cifra, impresionante, da una idea del impacto de la crisis en los franceses. En 2015, en término medio, poco más de 1.200.000 personas estaban en paro desde hacía más de un año, según el Insee en su “fotografía” del mercado laboral del año pasado.

Para que conste, el 2008 el Hexágono “sólo” contaba 678.000 demandantes de empleo de larga duración. Ciertamente, todo no es negro puesto que la tasa de paro se ha estabilizado en 2015 en un 10% de la población activa, es decir, 2.900.000 de personas (según principios de la OIT). Pero no deja de ser cierto que la progresión del número de personas que buscan trabajo desde hace más de un año es rápida. El alza alcanza un 80% desde finales de 2008. Sin embargo, el número de demandantes de empleo progresa un 38% en el mismo periodo. Es la prueba de que la crisis ha pesado más sobre los demandantes de empleo de larga duración

Por su parte, Pôle emploi contaba 2.500.000 de parados de larga duración a final de 2015. Pero esta cifra corresponde a los parados de categoría A, B y C. Se trata de personas que pueden haber trabajado durante el mes, a tiempo parcial. Las cifras del Insee son declarativas. Este organismo considera parado de larga duración a una persona mayor de 15 años de edad, disponible para trabajar en las dos semanas por venir, que ha efectuado una búsqueda activa de empleo en el transcurso del último mes y que declara no haber trabajado a lo largo del último año.

Según la definición del Insee, en 2015 cerca de un parado de cada dos no tenía empleo desde hacía más de un año. En cuanto a los parados de más de dos años, éstos eran 631.000 en término medio, o sea, cerca de la cuarta parte de todos los demandantes de empleo contados por el Insee ese año.

Cerca de la tercera parte de éstos tenían más de 50 años de edad, y los más afectados son los menos titulados. “Poco menos de la mitad de los no titulados o de los titulares del certificado de estudios del primer ciclo se encuentra en paro desde hace un año o más, frente a menos de la tercera parte de los titulares de un título de estudios superiores o igual al bachillerato más dos años de universidad”, explican los autores del estudio. El problema es que, con el tiempo, estas personas pierden sus aptitudes y ello puede pesar sobre su productividad y, por lo tanto, sobre el crecimiento potencial del país.

También existe otra dificultad: a pesar de la reactivación económica que se perfila este año es posible que el paro de larga duración no baje en un primer tiempo.



“Cuanto más reciente ha entrado en el paro una personal, más probabilidades tiene de encontrar un empleo”, explica Simon Beck, economista del Insee. Por lo tanto, cuando la actividad económica vuelve a iniciarse, los parados más recientes son los primeros que encuentran trabajo. Las personas que más dificultades experimentan en salir del paro son las que más tiempo llevan en paro”. De ahí el riesgo de ver a ciertas personas excluidas casi definitivamente del mercado laboral.

**Pensiones: la necesidad de financiación está estimada en 4.000 millones de euros para 2020.** En su informe anual provisional sobre la evolución y las perspectivas de las pensiones, el Consejo de orientación de las pensiones (COR) estima que el sistema continuará en déficit en el horizonte 2020, pero que su necesidad de financiación se reducirá a un 0,2% del PIB, es decir, alrededor de 4.000 millones de euros.

En 2015 alcanzaba el 0,3% del PIB y, en su punto más bajo, en 2008, más del 0,7%. Esta nueva proyección financiera es más optimista que la de del pasado año: entonces, la necesidad de financiación se esperaba que fuese de un 0,4% del PIB en 2020, es decir, 8.000 millones de euros. Y esta estimación fue revisada al alza con relación al 0,5% previsto para 2012.

Este aumento del optimismo no está vinculado a las perspectivas demográficas, que son relativamente estables (envejecimiento de la población, mantenimiento de la fecundidad en un nivel bastante alto), sino a indicadores macroeconómicos un poco mejores de lo que se esperaba –el crecimiento fue un poco más alto de lo que se estimó para 2015 (+1,3% en lugar de +1%)-. Otro factor clave fueron los efectos de la reforma de los regímenes de las pensiones complementarias de octubre pasado.

Más allá de 2020, el COR emite varias hipótesis, en función de la velocidad a la que crecen los rendimientos de la actividad (en conexión con la evolución de la productividad del trabajo). Este es uno de los determinantes más potentes después de la demografía. “En caso de crecimiento suficiente de los rendimientos de la actividad, el sistema de pensiones podría volver al equilibrio financiero y generar excedentes a más largo plazo”, escribe el Consejo. El retorno a dicho equilibrio estaría garantizado a mediados de los años 2020, con un aumento del 1,8% de los rendimientos de la actividad. En un escenario mediano, con un 1,5% la curva ondearía y los déficits finalizarían, de manera duradera, en los años 2036-2037.

Por el contrario, las necesidades de financiación aumentarían considerablemente en caso de crecimiento débil de los rendimientos de la actividad (+1% al año) hasta un 1,4% del PIB en 2060 (o sea, 28.000 millones). Sin embargo, los rendimientos de la productividad del trabajo, que eran robustos en los años 1990, han ralentizado en los años 2000 y se han hundido desde la crisis de 2008... La evolución de la tasa de paro tendrá efectos más limitados sobre las previsiones. Ciertamente, disminuye las entradas de cuotas a corto plazo pero a largo plazo las pensiones abonadas cuestan menos. Según ilustra el COR, “la situación financiera del sistema de pensiones sería así claramente mejor con una tasa de paro del 10% y rendimientos de la actividad creciendo un 2% anualmente (con un excedente de un 1,7% del PIB en 2060), que con una tasa de paro de un 4,5% pero un crecimiento de los rendimientos de la actividad de un 1,5% al año (con un excedente de un 0,5% del PIB en 2060)”.

El informe también estudia el equilibrio del sistema sobre un periodo de 25 años, de 2016 a 2040. Si el crecimiento de los rendimientos de la actividad fuese de un 1,5%, persistiría una ligera necesidad de financiación de un 0,1% del PIB. Más allá de este porcentaje, el sistema estaría en superávit; por debajo, las necesidades serían rápidamente considerables.

El COR presenta igualmente simulaciones con objeto de proporcionar instrumentos al legislador cuando aborde de nuevo el tema de las pensiones. Si el crecimiento de las rentas estuviese limitado a un 1% para garantizar el equilibrio sobre 25 años, se podrían accionar varias palancas. Habría que aumentar en 1,2 punto de porcentaje la tasa de cotización desde 2017, o bien bajar en un 3,8% todas las pensiones de jubilación.

**La industria francesa recurre cada vez más a los trabajadores desplazados.** El artículo 49-II de la ley de reforma laboral no es de los que están suscitando grandes movilizaciones puesto que se contenta con instaurar un derecho de entrada en las empresas controladas por la Inspección de Trabajo para los intérpretes jurados. Una medida bastante discreta pero sintomática del aumento del trabajo desplazado en Francia. A pesar de su declive continuo, la industria no escapa a esta regla.

En el espacio de cinco años, el número de trabajadores desplazados empleados por la industria se ha duplicado, para alcanzar 48.822 trabajadores en 2015, según datos del ministerio de Trabajo. Cifra en alza en un 27% sobre un año, sin incluir a los trabajadores de las empresas de trabajo temporal empleados por la industria.

Ciertamente, esta cifra sigue siendo débil con relación a los 3.300.000 de trabajadores del sector en 2014, pero es revelador de un problema francés. En los astilleros STX, la parte de trabajadores desplazados alcanza un 30% en periodo de armamento cuando la tasa de paro en Saint-Nazaire es de un 10%. En Dunkerque, Electricidad de Francia (EDF) ha empleado hasta un 59% de mano de obra extranjera durante la construcción del terminal de metano, etc. El año pasado, el peso de la industria en el reparto sectorial de las declaraciones ha crecido en dos puntos y alcanza el 16%, mientras que la construcción caía del 34 al 27%, acercándose a un nivel similar al de las empresas de trabajo temporal.

Se desconoce qué industrias recurren con mayor frecuencia a los trabajadores desplazados e igual ocurre con la nacionalidad de los mismos, pues no existen cifras cruzadas entre el país de origen de los trabajadores y los sectores de actividad. Según ciertos profesionales, Polonia y Rumania serían los mayores proveedores de la industria, junto con Italia para el Sur de Francia. España y Portugal están presentes principalmente en la construcción.

¿A qué es debido este auge de los desplazamientos? El arsenal legislativo que se viene aplicando desde hace dos años y los controles más frecuentes han empujado a las empresas a ponerse en regla, explican en el ministerio de Trabajo. Desde las leyes Savary y Macron, la empresa de acogida debe verificar que la sociedad extranjera ha efectuado la declaración de los trabajadores que desplaza. En caso de infracción grave la prestación de servicio internacional puede ser suspendida y un subcontratista extranjero puede verse castigado con una multa de hasta 500.000 euros.

Las empresas citan igualmente las dificultades que experimentan para contratar en ciertas profesiones y la falta de atracción de los jóvenes por la industria. “En la metalurgia necesitamos competencias que ya no están presentes en el territorio francés, tales como soldadores, ajustadores, caldereros, etc.”, explica Delphine Rudelli, directora del departamento de Relaciones Europeas e Internacionales de la Unión de las Industrias y las Profesiones de la Metalurgia (UIMM).

Por su parte, los sindicalistas apuntan hacia las cargas sociales sensiblemente menos altas. “La diferencia varía en una proporción de 1 a 4 entre Francia y Polonia”, afirma Jean Grosset, autor de un informe sobre los trabajadores desplazados para el Consejo Económico, Social y Medioambiental. Pero, “si las empresas abonan el alojamiento, la comida y los transporte sobre el terreno, entonces los costes son casi equivalentes”, asegura el Sr. Grosset. Análisis que ha sido corroborado por otro análisis reciente del ministerio de Economía. Queda que es muy difícil controlar todos estos parámetros.

Este recurso a los trabajadores desplazados ha suscitado reacciones en el plan político. A final de marzo, un colectivo de electos publicó en la prensa una tribuna solicitando que se haga obligatoria la utilización de la lengua francesa en las licitaciones de las obras públicas. Europa está tratando de luchar contra el dumping social, adaptando la remuneración del trabajador desplazado no sólo al SMI francés sino también a los convenios colectivos, bonificaciones y ventajas diversas. Pero esta ofensiva choca con la resistencia de los países de Europa del Este, que intentan frenar esta reforma.

**Movilizaciones contra la ley “El Khomri”.** Las movilizaciones del martes 14 de junio contra la ley de reforma laboral, que en esta fecha se debate en el Senado, anunciadas como masivas por el secretario general de la CGT, Philippe Martínez, no han tenido el carácter señalado. Efectivamente, es clásico el desacuerdo entre los servicios del Gobierno y los convocantes sobre el número de participantes, pero rara vez este desacuerdo ha alcanzado tales proporciones: la CGT anunciaba 1.300.000 participantes en París mientras que la policía solo ha contado entre 75.000 y 80.000 movilizadas. Estas últimas cifras son seguramente inferiores a la realidad si se tiene en cuenta el dispositivo policial de cierre de algunas calles adyacentes a la vía principal prevista para manifestar. Pero, aun teniendo en cuenta este factor, el número de manifestantes, alcanzaría, como máximo 130.000, según la policía, muy lejos del que indica la CGT.

Si ha sido más notorio, en relación con las protestas precedentes, el aumento de la violencia, principalmente contra las fuerzas de seguridad. Según la prefectura de policía ha habido 29 policías y 11 manifestantes heridos.

Por otra parte, las huelgas en vigor están perdiendo en intensidad, en particular en los ferrocarriles. El Gobierno no obstante, ha preferido no cantar victoria para mantener la línea de diálogo abierta recientemente con la CGT y que continuó con una reunión el viernes 17 de junio entre la ministra de trabajo, Myriam El Khomri y el secretario general de la CGT, Philippe Martínez.

**Encuentro de la ministra de Trabajo con el líder de la CGT: según Philippe Martínez, “los desacuerdos [sobre la reforma laboral] se han confirmado”.** El secretario general de la CGT se reunió el día 17 con Myriam El Khomri, con el fin de tratar de encontrar una salida al conflicto social que agita Francia desde la presentación del proyecto de ley de reforma laboral.

A la salida de la reunión el líder de la CGT confirmó el statu quo. “Existen puntos de desacuerdo entre la CGT y el Gobierno sobre cosas de fondo; estos desacuerdos se han confirmado hoy”, declaró, agregando que “no hay razón” para renunciar a las jornadas de movilización de los días 23 y 28 de junio.

El representante del primer sindicato francés, líder de la contestación sobre la reforma laboral, ha citado como divergencias “la cuestión del respeto de la jerarquía de las normas, de los despidos económicos, de la medicina del trabajo y del referéndum de empresa”. “Hay que retirar o volver a escribir esos artículos de la ley”, ha afirmado.

El líder de la CGT también denunció la falta de reacción de François Hollande quien, a pesar de las movilizaciones, no ha dado continuación a la solicitud de entrevista de la intersindical opuesta a la ley de reforma laboral. “Es una lástima que el presidente no haya contestado sí o no” a la carta enviada por las organizaciones de los trabajadores (CGT, FO, FSU y Solidarios) y de la juventud (UNEF, FIDL y UNL), lamentó Philippe Martínez.

Por su parte Myriam El Khomri indicó que el Gobierno y la CGT “no han encontrado un consenso” sobre el proyecto de ley de reforma del Código de Trabajo. “Tenemos desacuerdos que no son nuevos”, pero “el intercambio ha sido constructivo, argumentado, sobre esta primacía que nosotros queremos dar al acuerdo de empresa”, agregó la ministra, subrayando que iba a “leer atentamente” las propuestas entregadas hoy por la CGT.

**Seguro de paro: el Estado opta por el statu quo.** Antes del anuncio oficial del fracaso de las negociaciones sobre el futuro del seguro de paro, la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, publicó el jueves 16 de junio un comunicado que decía lo siguiente: “A partir de mañana [17 de junio], el Gobierno tomará disposiciones con el fin de garantizar rápidamente la continuidad de las prestaciones de paro, prorrogando el convenio actualmente en vigor más allá del 30 de junio, fecha en la que debía finalizar.” La única modificación será la introducción en este convenio de normas ya validadas en el acuerdo firmado en relación con los trabajadores fijos discontinuos del espectáculo por el empresariado y los sindicatos de ese sector.

El Gobierno espera que esta situación sea muy temporal y “[...] desea que en septiembre, los interlocutores sociales puedan retomar las negociaciones, con vistas a alcanzar un acuerdo sobre el régimen general del seguro de paro”. Cuando volverá a estar al orden del día la última etapa del Pacto de Responsabilidad.

**El fin de la primacía del diálogo social en Francia.** Durante su campaña presidencial François Hollande convirtió su fe en el diálogo social, entre y con los interlocutores sociales, en su sello personal frente a Nicolas Sarkozy que quería saltarse los cuerpos intermediarios. Propuso incluso constitucionalizar el diálogo

social. Llegado al Elíseo, el candidato socialista prometió de recurrir sistemáticamente al empresariado y los sindicatos sobre las reformas sociales, instituyendo una gran cita anual que establecía el programa de las negociaciones. Su elección misma de primer ministro, el muy socialdemócrata Jean-Marc Ayrault, confirmó esta voluntad, y uno de sus allegados, Michel Sapin, se encargó de ponerle música en el ministerio de Trabajo.

Esto derivó a principios de 2013 en un acuerdo importante sobre la “protección del empleo”, principalmente con la reforma de los planes sociales. Ello no se desarrolló sin polémica pues la CGT y Fuerza Obrera fueron contra corriente. Pero el Gobierno pudo, no obstante, mostrar un acuerdo mayoritario, que fue validado en el Parlamento con algunas enmiendas.

El modelo empezó a fisurarse a principios de 2014, cuando François Hollande lanzó su pacto de responsabilidad dirigiéndose únicamente al empresariado, en lugar de proponer debates tripartitos entorno a una reforma. Los sindicatos sólo fueron solicitados más tarde.

Pero la llegada de Manuel Valls a Matignon, a final de marzo de 2014, supuso un cambio radical. Menos socialdemócrata que su antecesor, para el primer ministro el diálogo social no es una prioridad. A ello se ha venido a sumar la falta persistente de resultados sobre el empleo, una crisis interna de la CGT que la ha conducido a radicalizarse y a comprometerse cada vez más con un enfoque protestatario y un empresariado cada vez menos dispuesta al compromiso.

El proyecto de ley de reforma laboral a principios de año ha terminado por poner en peligro el modelo del debate del quinquenio. Convencido de que dos clases de sindicalismo irreconciliables, al igual que hay “dos izquierdas irreconciliables”, Manuel Valls ha optado por hablar sólo con los “reformistas”, haciendo importantes concesiones a la CFDT. Por su parte, los sindicatos contestatarios, encabezados por la CGT, tampoco han buscado ningún compromiso. Se han lanzado en una guerra implacable con el poder socialista, a golpes de movilizaciones. El fracaso de la negociación sobre el seguro de paro ha terminado por hacer estallar la primacía acordada al diálogo social al principio del quinquenio.

**Seguro de desempleo: El Gobierno deberá resolver el dossier de regulación de las prestaciones por desempleo.** Frente al fracaso de las negociaciones sobre la firma de un convenio regulador de las prestaciones por desempleo, fracaso constatado el jueves 16 de junio, corresponde al Gobierno el establecimiento de las normas que regirán la prestación económica de paro. Para algunos editorialistas y, en particular, para el diario económico *Les Echos*, la responsabilidad del fracaso de la negociación incumbe al Gobierno, que tensó enormemente la situación al afirmar en medio de la conflictividad por la reforma laboral, que incluiría un aumento de cotizaciones patronales por contrataciones en régimen de duración determinada (CDD), para combatir su uso excesivo y la precariedad del empleo.

La consecuencia directa de este fracaso es que el Gobierno deberá asumir sus responsabilidades y aplicar las medidas de ahorro que había pedido a los negociadores. Este ahorro podría conseguirse instaurando nuevas modalidades de

cálculo de la prestación, aumentando la edad a partir de la cual se concedería un aumento de duración del cobro de la prestación, etc.

Es de subrayar que en materia de ahorro, los negociadores habían avanzado en sus discusiones privadas. El enrarecimiento y la tensión en las negociaciones han impedido que se pudiesen plasmar en un acuerdo entre sindicatos y organizaciones patronales.

**François Hollande anuncia nuevas medidas fiscales en beneficio del empleo.** En una entrevista concedida al diario *Les Echos* de 30 de junio, el presidente de la República se pronuncia, una vez más, por el mantenimiento del artículo 2 del proyecto de ley de reforma laboral.

François Hollande afirma que dicho artículo será mantenido en su redacción actual pero que los debates podrían conducir a especificar el papel de los sectores profesionales en la reforma del Código de Trabajo.

En relación con el Pacto de Responsabilidad, el presidente explica que se respetará íntegramente la reducción de las cargas de las empresas por 41.000 millones de euros, pero que con el fin de aumentar la creación de puestos de trabajo generadas por la recuperación económica, ha decidido –junto con el primer ministro- dedicar 5.000 millones que quedan para 2017 al aumento del crédito fiscal por la competitividad y el empleo (CICE) -que ascenderá así al 7% de la masa salarial-, y a la baja del impuesto sobre las sociedades de las pequeñas y medianas empresas.

François Hollande quiere fortalecer el CICE, que ya está plenamente entendido y es apreciado por las empresas, principalmente por las micro y las pequeñas y medianas, y que surte efectos rápidos sobre el empleo, la inversión y el poder adquisitivo. En cuanto al impuesto sobre las sociedades, el presidente declara que su tasa será bajada para las pequeñas y medianas empresas y se preverá una medida de reducción de la misma destinada a los artesanos, que no se benefician del CICE.

Las empresas disfrutarán de un crédito a partir de 2017, que será registrado en sus propias cuentas, y las que lo deseen podrán beneficiarse de la prefinanciación por el Banco público de Inversiones (BPI).

También se le ha preguntado al presidente si va a exigir contrapartidas al empresariado, a lo que François Hollande responde que “es el sentido mismo del Pacto [de Responsabilidad]”. “Los interlocutores sociales deben realizar con regularidad, en los sectores y las empresas, una evaluación del CICE; sobre todo si aumenta en 2017. En cuanto a la patronal Medef, el Sr. Hollande declara que “no ha asumido su responsabilidad en las negociaciones del seguro de paro, y ha adoptado una posición peligrosa no aplicando la ley relativa a la Cuenta penosidad”.

Por lo que respecta a la prolongación de la prima para la contratación en las Pymes con menos de 250 trabajadores, el presidente explica que con este dispositivo se han realizado un poco más de 500.000 contrataciones, que su éxito para el empleo y las empresas es manifiesto y que, por lo tanto, “[ha] decidido prolongarla durante todo el año 2017”.

François Hollande considera que en cuatro años el Gobierno ha modernizado considerablemente la economía francesa. “El coste del trabajo en la industria es hoy inferior al de nuestros vecinos alemanes y sin pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores puesto que hemos obtenido este resultado reduciendo las cargas de las empresas. La ley relativa a la protección del empleo, de 2013, la reforma de la formación profesional y la del diálogo social, han mejorado considerablemente la situación”.

En la actualidad, el proyecto de ley El Khomri “prevé la evolución progresiva del Código de Trabajo en los próximos años e introduce la Cuenta personal de actividad que será una etapa importantísima en la protección de los recorridos profesionales”, dice el presidente.

Y François Hollande termina la entrevista afirmando que ha querido conceder un lugar primordial a la innovación y a la inversión, y que, al mismo tiempo, se han reducido los déficits públicos, los regímenes de las pensiones han sido equilibrados y la protección social ha sido preservada sin tocar los derechos de los asegurados sociales.

**Myriam El Khomri revela las modificaciones aportadas a la reforma laboral.** El diario *Le Monde* de 30 de junio publica una entrevista que ha realizado a la ministra de Trabajo en la que, con la esperanza de evitar un nuevo bloqueo, esta especifica los cambios que el Gobierno va a aportar a su proyecto de ley, que será examinado por los diputados a partir del 5 de julio.

La ministra dice que entre el statu quo y la sobrepuja liberal, sinónimo de evitación de los sindicatos, del final de las 35 horas y de la supresión de los nuevos derechos de los trabajadores –tal y como ha sido decidido por el Senado-, existe otra vía: la vía del progresismo negociado.

La reforma que la ministra propone permite que viva el diálogo social lo más cerca del campo pues, según ella, “sólo así se podrá disponer de una verdadera capacidad de adaptación de nuestras empresas y desarrollar el empleo”.

Por lo que se refiere al riesgo de *dumping* social, la ministra no toma la cosa a la ligera pero constata que este argumento hace 30 años que se pone sobre el tapete cuando una ley da más espacio al acuerdo de empresa. Sin embargo, siempre según la Sra. El Khomri, los acuerdos de empresa no han dejado de desarrollarse y de aportar soluciones hechas a medida de las aspiraciones de los trabajadores y de las necesidades de las empresas. Y, afirma, “para proteger a los trabajadores, echamos un “cerrojo” suplementario: un acuerdo de empresa sólo podrá ser firmado por sindicatos que hayan obtenido el 50% de los votos en las elecciones de la empresa.

Por otra parte, la ministra dice que no hay que idealizar la protección que aportan los 700 sectores profesionales existentes, pues 42 de estos prevén un primer nivel de salario inferior al SMI. Más de la cuarta parte no han negociado un acuerdo desde hace 15 años y un tercio desde hace 10. Es por ello que “nos comprometemos a agrupar los sectores profesionales, para hacerlos más eficaces.

**Propuestas que va a someter a los interlocutores sociales y a su mayoría parlamentaria para alcanzar un acuerdo:** Con el fin de clarificar la situación en aquellos casos en los que la ley no prevé la primacía del acuerdo de empresa, en el seno de cada sector, los empresarios y los sindicatos deberán negociar para definir los temas sobre los cuales un acuerdo de empresa no podrá derogar un acuerdo sectorial. En la actualidad, el Código de Trabajo “no prevé, por ejemplo, la primacía del acuerdo sectorial en las indemnizaciones convencionales de ruptura de contrato o en los preavisos convencionales de despido”, recuerda la ministra.

La ley va a agregar dos ámbitos en los que la empresa no podrá hacer menos que el sector: en la igualdad profesional y en la penosidad del trabajo. Lo que propone la ministra no modifica en nada la importancia que se desea otorgar al acuerdo de empresa, pero fortalece el papel del sector.

Myriam El Khomri también desea que los interlocutores sociales se impliquen más en los trabajos de la nueva escritura del Código de Trabajo (el artículo 1 del proyecto de ley crea una comisión encargada de reescribirlo). Por lo tanto, va a depositar una enmienda para que esta misión sea confiada al Alto Consejo del Diálogo Social. Se trata de una garantía suplementaria que permite que el diálogo social esté en el centro del proceso de reforma.

La ministra afirma que estos avances se han realizado con una “voluntad de diálogo” y que, además, responden a las inquietudes expresadas por las organizaciones sindicales, y también por las patronales, sobre la desaparición de los sectores profesionales.

“Esperamos que las enmiendas que proponemos respondan a las esperanzas de los diputados rebeldes durante el debate en la Asamblea”, apunta la ministra.

**Y el mes de junio finaliza con el endurecimiento por el Senado del proyecto de ley de reforma laboral.** Mientras el jefe del Estado apuesta por el contraste entre sus reformas y las propuestas por la derecha para recuperar sus galones de hombre de izquierdas, el proyecto de ley de reforma laboral resultante de su paso por la Cámara Alta proporciona una ilustración sorprendente. Especificando que este texto podría servir de base a una futura reforma en caso de alternancia política en 2017, los senadores de derechas, mayoritarios, han endurecido claramente el proyecto de ley: han simplificado el retorno a las 39 horas por acuerdo de empresa, abrogado el umbral mínimo de 24 horas semanales para el tiempo parcial, y anulado la generalización de la Garantía jóvenes. También han vuelto a introducir las indemnizaciones de los tribunales de Trabajo (*Prud'hommes*), flexibilizado considerablemente el diálogo social en las pequeñas y medianas empresas y aumentado el nivel de los umbrales sociales.

Pero la verdadera batalla tendrá lugar en la Asamblea Nacional el próximo 5 de julio, cuando el texto vuelva para ser examinado en segunda lectura.